

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN**

CARMEN ENID ACEVEDO BETANCOURT

Recurrente

v.

**ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICOS DE PUERTO RICO;
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD
DE PUERTO RICO;
CORPORACIÓN PÚBLICA PARA LA
SUPERVISIÓN Y SEGURO DE
COOPERATIVAS DE PUERTO RICO;
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTALES;
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
PÚBLICA; JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE
PUERTO RICO**

Recurridas

Civil Núm.:

Sala:

Sobre: Derecho
constitucional de acceso a
la información pública

RECURSO ESPECIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

AL TRIBUNAL:

COMPARECE la parte recurrente, **Carmen Enid Acevedo Betancourt** por conducto de la representación legal que suscribe, y **EXPONEN, ALEGAN** y **SOLICITAN:**

I. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

1.1. La Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia ostenta jurisdicción y competencia para entender en el caso de epígrafe en virtud del Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9919, dado que la parte recurrente es residente de San Juan, Puerto Rico.

II. LAS PARTES

2.1. La parte recurrente, **CARMEN ENID ACEVEDO BETANCOURT** (en adelante, la periodista Acevedo Betancourt o la parte recurrente), es una persona natural, mayor de edad, periodista de profesión y vecina de San Juan, Puerto Rico. Su dirección física y postal es 451 Calle Canals, Urb. Roosevelt, San Juan, Puerto Rico 00918. Su número de teléfono es el (787) 404-0465.

- 2.2. La periodista Acevedo Betancourt es Directora y Fundadora de Bonita Radio, <https://www.bonitaradio.net/> (última visita el 6 de junio de 2024).
- 2.3. La parte recurrida, la **ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD DE PUERTO RICO** (en adelante, ASES). La ASES fue creada en virtud de la Ley Núm. 72 del 7 de septiembre de 1993, según enmendada, 24 LPRA §§ 7001-7054. Su Directora Ejecutiva es Roxana Rosario Serrano. La dirección física de ASES es Urb. Caribe, 1549 Calle Alda, San Juan, Puerto Rico 00926-2712. Su dirección postal es PO Box 195661, San Juan, PR 00919-5661. Su número de teléfono es el (787) 474-3300.
- 2.4. La parte recurrida, la **ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO** (en adelante, ASEM). ASEM fue creada en virtud de la Ley Núm. 26 del 20 de noviembre de 1974, según enmendada, 24 LPRA §§ 3401-3425. Su Director Ejecutivo es el Lcdo. Jorge E. Matta González. La dirección física de ASEM es Centro Médico de Puerto Rico, Barrio Monacillos, San Juan, PR 00935. Su dirección postal es PO Box 2129, San Juan, PR 00922-2129. Su número de teléfono es el (787) 777-3535.
- 2.5. La parte recurrida, la **CORPORACIÓN PÚBLICA PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGURO DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO** (en adelante, COSSEC). COSSEC fue creada en virtud de la Ley Núm. 114-2001, según enmendada, 7 LPRA §§ 1241-1258. Su Presidenta Ejecutiva es la Sa. Mabel Jiménez Miranda. La dirección física de COSSEC es Edificio COSSEC, Avenida Arterial B, Hato Rey, PR 00918. Su dirección postal es PO Box 195449, San Juan, PR 00919-5449. Su número de teléfono es el (787) 622-0957.
- 2.6. La parte recurrida, **DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES** (en adelante, DRNA). El DRNA fue creado en virtud de la Ley Núm. 23 del 20 de junio de 1972, según enmendada, 3 LPRA §§ 151-163. Su Secretaria es la Lcda. Anais Rodríguez Vega. La dirección física del DRNA es Carretera Núm. 8838, km. 6.3, Sector El Cinco, Río Piedras, PR 00926. Su dirección postal es San José Industrial Park, 1375 Ave. Ponce de León, San Juan, PR 00926. Su número de teléfono es el (787) 999-2200.

2.7. La parte recurrida, **DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PUERTO RICO** (en adelante, DSP). El DSP fue creado en virtud de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, 25 LPRA §§ 3501-3714. Su Secretario es el Sr. Alexis Torres La dirección física y postal del DSP es 235 Ave. Arterial Hostos, Capital Center, Torre Norte, Hato Rey, PR 00918. Su número de teléfono es el 787-903-5602 Ext. 6022.

2.8. La parte recurrida, **JUNTA DE PLANIFICACIÓN DE PUERTO RICO** (en adelante, JP). La JP fue creada en virtud de la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada, 23 LPRA §§ 62-62g. Su Presidente es el planificador Julio Lassús Ruiz. La dirección física de la JP es Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego, Pda. 22, Santurce, PR 00911. Su dirección postal es PO Box 41119, San Juan, PR 00940-1119. Su número de teléfono es el (787) 723-6200.

III. LOS HECHOS

3.1. Entre las fechas del 29 de abril y el 2 de mayo de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió solicitudes de información a las entidades gubernamentales recurridas, mediante las cuales solicitó una lista de sus respectivos empleados de confianza para el período comprendido desde el año 2021 hasta el presente.

A. La solicitud de información a ASEM y ASES

3.2. El 29 de abril de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un correo electrónico a la Sa. Wilmelis Márquez, portavoz de prensa de ASEM y ASES, mediante el cual solicitó una lista de los empleados de confianza de ambas entidades, incluyendo su nombre, la posición que ocupan y su salario. **Anejo 1.**

3.3. Aunque inicialmente se indicó por error que la información solicitada era del Dpto. de Educación, ese mismo día, la periodista Acevedo Betancourt aclaró que la solicitud estaba dirigida a la ASEM y la ASES. **Anejo 1.**

3.4. El 6 de mayo de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un nuevo correo electrónico a la Sa. Márquez dando seguimiento a su solicitud de información. **Anejo 1.**

3.5. Al día de hoy, ni la Sa. Márquez ni algún otro representante de la ASEM o la ASES han contestado la referida solicitud, y mucho menos se ha hecho entrega de la información solicitada.

B. La solicitud de información a COSSEC

3.6. El 29 de abril de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un correo electrónico a la Sa. Lisdián Acevedo Román, oficial de prensa de COSSEC, mediante el cual solicitó una lista de los empleados de confianza de dicha entidad, incluyendo sus nombres, la posición que ocupan, sus salarios y la fecha efectiva de nombramiento. **Anejo 2.**

3.7. Al día de hoy, ni la Sa. Acevedo Román ni algún otro representante de COSSEC han contestado la referida solicitud, y mucho menos se ha hecho entrega de la información solicitada.

C. La solicitud de información al DSP

3.8. El 1 de mayo de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un correo electrónico a la Sa. Ivonne Rosario, portavoz de prensa del DSP, mediante el cual solicitó una lista de los empleados de confianza de dicha entidad, incluyendo sus nombres, la posición que ocupan, sus salarios y la fecha efectiva de nombramiento, desde el 2021 hasta el presente. **Anejo 3.**

3.9. Al día de hoy, ni la Sa. Rosario ni algún otro representante del DSP han contestado la referida solicitud, y mucho menos se ha hecho entrega de la información solicitada.

D. La solicitud de información a la JP

3.10. El 2 de mayo de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un correo electrónico a la Sa. Ivelisse Prado Ortiz, Principal Oficial de Comunicaciones de la JP, mediante el cual solicitó una lista de los empleados de confianza de dicha entidad, incluyendo sus nombres, la posición que ocupan y sus salarios, desde el 2021 hasta el presente. **Anejo 4.**

3.11. Ese mismo día, la periodista Acevedo Betancourt recibió un mensaje automatizado de la Sa. Prado Ortiz, mediante el cual se solicitaba que, para asuntos relacionados con la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la JP se

comunicara con la planificadora Erika Rivera o con la Sa. Marisol Luna a los correos electrónicos provistos en dicho mensaje. **Anejo 5.**

3.12. De conformidad con lo anterior, el mismo 2 de mayo de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un correo electrónico a la planificadora Rivera y a la Sa. Luna, mediante el cual reenvió su solicitud original. **Anejo 6.**

3.13. Al día de hoy, la Sa. Prado Ortiz, la planificadora Rivera y la Sa. Luna o algún otro representante de la JP no han contestado la referida solicitud, y mucho menos se ha hecho entrega de la información solicitada.

E. La solicitud de información a la JP

3.14. El 2 de mayo de 2024, la periodista Acevedo Betancourt envió un correo electrónico Joel A. Seijo Rivera, y Juan José Díaz Díaz, oficiales de prensa del DRNA, mediante el cual solicitó una lista de los empleados de confianza de dicha entidad, incluyendo sus nombres, la posición que ocupan y sus salarios, desde el 2021 hasta el presente. **Anejo 7.**

3.15. Al día de hoy, el Sr. Seijo Rivera, el Sr. Díaz Díaz o algún otro representante del DRNA no han contestado la referida solicitud, y mucho menos se ha hecho entrega de la información solicitada.

IV. CAUSA DE ACCIÓN

A. Recurso Especial de Acceso a la Información Pública

4.1. La parte recurrente acoge, adopta por referencia y hace formar parte de la presente causa de acción todos los hechos alegados en los párrafos anteriores del presente recurso.

4.2. El derecho de acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental. Kilómetro 0 v. Pesquera López, 207 DPR 200, 207 (2021); Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 199 DPR 59, 80 (2017); Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).

4.3. Dicho derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. CONST. PR, Art. II, § 4. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 207; Engineering Services International, Inc. v. AEE, 205 DPR 136, 145 (2020); Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 67; Nieves v. Junta, 160 DPR 97, 102 (2003); Ortiz, 152 DPR en la pág. 175; Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477, 485 (1982).

4.4. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental, En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha reconocido que

[E]l derecho de acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el control de la corrupción. El derecho de acceso a la información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública del gobierno y de las restantes autoridades estatales. El pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo. De otra parte, el libre acceso a la información es un medio para que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía pueda ejercer adecuadamente sus derechos políticos. Ciertamente, los derechos políticos tienen como presupuesto la existencia de un debate amplio y vigoroso para el cual es indispensable contar con la información pública que permita evaluar con seriedad los avances y las dificultades de los logros de las distintas autoridades. Sólo a través del acceso a la información bajo el control del Estado es posible que los ciudadanos puedan saber si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas. Finalmente, el acceso a la información tiene una función instrumental esencial. Solamente a través de una adecuada implementación de este derecho las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos y qué mecanismos existen para protegerlos. En particular, la implementación adecuada del derecho de acceso a la información, en todas sus dimensiones, es condición esencial para la realización de los derechos sociales de los sectores excluidos o marginados. En efecto, estos sectores no suelen tener formas alternativas sistemáticas y seguras para conocer el alcance de los derechos que el Estado ha reconocido y los mecanismos para exigirlos y hacerlos efectivos.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO 2-3 (2da ed. 2012) (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión), disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202da%20edicion.pdf> (última visita el 7 de junio de 2024).

4.5. Así, en Claude Reyes y otros v. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151 (Corte Interamericana de Derechos Humanos), enfrentado a una reclamación incoada por un grupo de personas y organizaciones no gubernamentales contra el Gobierno de Chile, ante la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras a brindarles información sobre un proyecto

que se llevaría a cabo en la decimosegunda región de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló lo siguiente:

84. Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano”. La Asamblea General de la OEA en diversas resoluciones consideró que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.

85. La Corte Interamericana ha hecho referencia a la estrecha relación existente entre democracia y libertad de expresión, al establecer que

[...] la libertad de expresión es un elemento fundamental sobre el cual se basa la existencia de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también *conditio sine qua non* para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

86. En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso.

87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad.

Id. en los ¶¶ 84-87.

4.6. Tanto la Declaración Americana en su art. IV (“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”), como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 19 (“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”), generan

obligaciones para Estados Unidos y sus territorios, exigiendo que la gestión estatal del gobierno de Puerto Rico se rija por “los principios de máxima divulgación y buena fe”. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO JURÍDICO INTERAMERICANO, *supra*.

4.7. De igual forma, los principios 2 al 4 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH, reconocen la naturaleza fundamental del derecho de acceso a la información, e imponen a los Estados y sus territorios una obligación de máxima divulgación, que “sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. *Principios sobre Libertad de Expresión*, <http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosLE.asp> (última visita el 7 de junio de 2024).

4.8. El derecho de acceso a la información también encuentra su justificación en los supuestos básicos de la vida en sociedades democráticas. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590 (“[E]l acceso a la información constituye un componente importante de una sociedad democrática, en donde el ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del Gobierno”); Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 80 (“El acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática”); Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 145.

4.9. Ello se debe a que, “en una sociedad democrática, ‘resulta imperativo reconocer al ciudadano común el derecho legal de examinar e investigar cómo se conducen sus asuntos’”. Kilómetro 0, 207 DPR en las págs. 207-208 (citando a Ortiz, 152 DPR en la pág. 175).

4.10. Después de todo, “[s]in conocimiento de hechos no se puede juzgar; tampoco se puede exigir remedios a los agravios gubernamentales mediante los procedimientos judiciales o a través del proceso de las urnas cada cuatro (4) años”. Soto, 112 DPR en la pág. 485. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en las págs. 80-81.

- 4.11. Además, el derecho de acceso a la información “es un catalizador indispensable de la participación ciudadana”. Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 146. Véase también Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 70.
- 4.12. Visto de esta manera, el derecho al acceso a la información sirve de garante de todo régimen que aspira a ser democrático. En palabras del profesor Efrén Rivera Ramos:
- Cualquiera que sea la definición que adscribamos al concepto “democracia”, su principio cardinal es que el poder político ha de residir en el pueblo y que los gobernantes ejercen sus funciones para el pueblo y por mandato de éste. Mal podría gobernarse a sí mismo un pueblo que estuviere ajeno a cuanto sucede en la conducción de sus asuntos.
- Efrén Rivera Ramos, *La libertad de información: Necesidad de su reglamentación en Puerto Rico*, 44 REV. JUR. UPR 67, 69 (1975). Véase también Luis F. Estrella Martínez, *La libertad de información como elemento necesario para el Acceso a la Justicia*, 55 REV. DER. PR 23 (2016); Carlos Ramos Hernández, *Acceso a la información, transparencia y participación política*, 85 REV. JUR. UPR 1015 (2016); Érika Fontánez Torres, *El derecho a participar: Normas, estudios de caso y notas para una concreción*, 68 REV. JUR. COL. ABOG. PR 631, 656-57 (2007); Luis Villanueva Nieves, *Sobre el derecho a saber y la obligación de revelar*, 37 REV. JUR. U. INTER PR 217 (2003).
- 4.13. Dada la importancia de este derecho, “[e]l Estado . . . no puede negar caprichosamente y sin justificación aparente la información recopilada en su gestión pública”. Soto, 112 DPR en la pág. 489; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago v. Bobb y El Mundo, 117 DPR 153, 158 (1986).
- 4.14. Ello se debe a que “al recibir del Pueblo soberano la función de gobernar, el Estado no quedó en libertad de decidir cuáles papeles y documentos resultantes de su gestión pública estarían fuera del escrutinio de quienes son, en esencia, la fuente misma de la soberanía”. Soto, 112 DPR en la pág. 489.
- 4.15. Así, “[h]oy día la secretividad en los asuntos públicos es excepción y no norma”. Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 208 (citando a Santiago, 117 DPR en la pág. 159).
- 4.16. Además, en la tarea de garantizar este derecho, “la prensa constituye ‘un vehículo de información y opinión [para] informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como sustituto para obtener noticias e información para sus lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean recopilarla’”. Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.17. Por otra parte, el derecho al acceso a la información, en su modalidad de acceso a documentos públicos, encuentra reconocimiento estatutario en el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 1781, el cual establece, que “[t]odo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”.

Id.

4.18. Igualmente, la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, según enmendada, 3 LPRA §§ 9911-9923, establece como política pública, lo siguiente:

1. La información y documentación que produce el gobierno se presume pública y accesible a todas las personas por igual.
2. La información y documentación que produce el gobierno en sus estudios, transacciones y en el ejercicio de la autoridad pública, de manera directa o delegada, son patrimonio y memoria del pueblo de Puerto Rico.
3. El derecho constitucional de acceso a la información requiere la transparencia gubernamental.
4. Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa.
5. El derecho de acceso a la información pública es un pilar constitucional y un derecho humano fundamental.
6. El acceso a la documentación e información pública tiene que ser ágil, económico y expedito.
7. Toda persona tiene derecho a obtener la información y documentación pública, sujeto a las normas y excepciones aplicables.
8. El Gobierno de Puerto Rico establece en la presente Ley una política de apertura a la información y documentación, que incluya la disponibilidad de la tecnología y de los avances necesarios para hacer valer el derecho de los solicitantes a acceder a la información y documentación pública de forma oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles, inalterados e íntegros.

Art. 3, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9913.

4.19. A su vez, la frase ‘documento público’ es definido en la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico como

[T]odo documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que de conformidad con lo dispuesto en la sec. 1002 de este título se haga conservar [o] que se requiera conservar permanentemente o temporalmente como prueba de las transacciones o por su valor legal. Incluye aquellos producidos de forma electrónica que cumplan con los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos.

3 LPRA § 1001.

- 4.20. De igual forma, el inciso (a) del citado artículo dispone que un ‘documento’ incluye, pero no se limita a, “todo papel, libro, folleto, fotografía, película, microforma, cinta magnetofónica, mapa, dibujo, plano, cinta magnética, disco, video cinta o cualquier otro material leído por máquina y cualquier otro material informativo sin importar su forma o características físicas”. *Id.*
- 4.21. Visto de esta manera, el que la información solicitada no conste en un documento impreso no impide que sea clasificada como información pública o que pueda ser divulgada a petición de cualquier persona. Véase Centro de Periodismo Investigativo v. García Padilla, et al., KLAN 2015-01585 (Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11 de abril de 2016) (“Las múltiples formas en las que hoy día se genera, recibe e incluso se almacena o conversa información, y que no se limita . . . a información recogida en un formato de papel, no puede impedir, como norma general, que la información de carácter pública pueda ser divulgada . . .”).
- 4.22. En virtud de lo anterior, “[u]na vez un documento es catalogado como público, todo ciudadano y ciudadana, por el hecho de serlo, tiene legitimación activa para solicitar y acceder a información pública”. Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 147. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 209.
- 4.23. De igual forma, procede también la divulgación de información pública, aun cuando esta se encuentre bajo la custodia de un tercero. Art. 3, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9913 (“Toda información o documento que se origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del Gobierno, aunque se encuentre bajo la custodia de un tercero, se presume público y debe estar accesible al Pueblo y la prensa”). Véase además Centro de Periodismo Investigativo v. García Padilla, et al., KLAN 2015-01585 (Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 11 de abril de 2016) (resolviendo que la información sobre las entidades que adquirieron bonos de obligación general durante la emisión realizada en marzo de 2014 era pública, aun cuando estuviera en manos de la compañía privada suscriptora de los bonos).
- 4.24. De igual forma, “la alegada onerosidad de reproducir documentación no es fundamento suficiente para coartar el derecho de acceso a la información pública

y los principios de transparencia y participación ciudadana” que obligan al Estado.

Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 162.

4.25. Ahora bien, pese a la naturaleza fundamental del derecho al acceso a la información, el mismo no es un derecho absoluto, “sino que pueden existir intereses apremiantes del estado que justifiquen un reclamo de confidencialidad de su parte”. Trans Ad de PR, 174 DPR en la pág. 68; Angueira v. JLBP, 150 DPR 10, 24 (2000); Soto, 112 DPR en la pág. 493. Véase también Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82.

4.26. Así, cuando el Estado interesa invocar la confidencialidad de documentos o información pública,

debe probar **de forma precisa e inequívoca** la aplicabilidad de alguna de las siguientes excepciones: (1) que una ley así lo declara; (2) que la comunicación está protegida por algún privilegio evidenciario; (3) que la divulgación de la información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se trate de un confidente, según la Regla 515 de Evidencia de 2009, o (5) que sea información oficial conforme a la Regla 514 de Evidencia de 2009.

Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210 (énfasis suplido). Véase también Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 148; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Trans Ad PR, 174 DPR en la pág. 68; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.27. En estos casos, el Estado “tiene la carga de probar que satisface cualquiera de las excepciones antes enumeradas”, Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210; Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 148; Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 83; Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 590; Angueira, 150 DPR en la pág. 24; Santiago, 117 DPR en la pág. 159, por lo que no puede descansar en “meras generalizaciones” para invocar exitosamente alguna de estas excepciones. Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210; Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 149; Santiago, 117 DPR en la pág. 159.

4.28. Por consiguiente, es deber del Estado dar una “explicación detallada” de la excepción invocada, Bathia Gautier, 199 DPR en la pág. 91, que permita acreditar su validez, y los tribunales deben examinar estos reclamos con suma cautela. Santiago, 117 DPR en la pág. 159 (Los tribunales deben ser “cautelosos en

conceder livianamente cualquier pedido de confidencialidad del Estado”). Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210.

4.29. Además, la mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Del texto de la ley debe surgir la clara intención del legislador de mantener ciertos documentos bajo el palio de la confidencialidad. Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 592 (“[N]o podemos menos que exigirle a la Asamblea Legislativa una orden clara y terminante.”).

4.30. De igual manera,

toda ley que pretenda ocultar información a un ciudadano bajo el palio de la confidencialidad tiene que justificarse a plenitud. Ello se satisface si la legislación: (1) cae dentro del poder constitucional del Gobierno; (2) propulsa un interés gubernamental importante o sustancial; (3) el interés gubernamental no está relacionado con la supresión de la libre expresión, y (4) la restricción concomitante del derecho a la libre expresión no es mayor que la esencial para propulsar dicho interés.

Colón Cabrera, 170 DPR en la pág. 592-93.

4.31. En sus expresiones más recientes sobre este tema, el Tribunal Supremo ha aclarado que “las restricciones impuestas por el aparato gubernamental [al acceso a la información] deben responder a un interés apremiante del Estado”, y no meramente a un interés importante o sustancial. Bhatia Gautier, 199 DPR en la pág. 82. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en la pág. 210 (expresando que “aquellas restricciones que el Estado impone en el acceso a la información deben satisfacer los criterios de un escrutinio estricto”); Engineering Services International, 205 DPR en la pág. 148 (igual que Kilómetro 0).

4.32. No obstante, en aquellos casos en los que el Estado logre invocar exitosamente algún reclamo de confidencialidad, procede entonces determinar si el interés público en divulgar la información excede el reclamo de privacidad. Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 130 DPR 919, 938 (1992) (“Para que el Estado prevalezca, éste debe presentar prueba y demostrar la existencia de intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores protegidos por este derecho de libertad de información de los ciudadanos. Nuestra función judicial es ‘resolver si determinada información está cubierta por el manto de secretividad y, de estarlo,

si ello es compatible con el ejercicio de derechos constitucionales protegidos”.) (citando a Soto, 112 DPR en la pág. 498).

4.33. Además, aun en casos en los que se avale un reclamo de confidencialidad por parte del Estado, debe hacerse un esfuerzo por proveer toda la información pública no comprendida dentro de dicho reclamo, incluida la posibilidad de segregar o tachar aquellas partes confidenciales de documentos o expedientes públicos. Colón Cabrera, 170 DPR en las págs. 596-97. Véase también Kilómetro 0, 207 DPR en las págs. 221-222.

4.34. De otra parte, en su aspecto procesal, la Ley Núm. 141-2019 codifica varios principios de la doctrina constitucional sobre el derecho de acceso a la información antes discutida y, a su vez, establece en nuestro ordenamiento jurídico, por primera vez, parámetros para tramitar una solicitud de información ante entidades gubernamentales, entre otras disposiciones importantes. 3 LPRA § 9913.

4.35. En su Artículo 8, la Ley Núm. 141-2019 dispone que “[l]a información pública solicitada se entregará en el formato solicitado y por el medio que el solicitante haya señalado[.]” 3 LPRA § 9918.

4.36. Asimismo, la Ley Núm. 141-2019 contiene una Cláusula de Interpretación la cual establece, primero, que “[l]a enumeración de derechos que antecede **no se entenderá de forma restrictiva**, ni supone la exclusión de otros derechos y procedimientos pertenecientes a las personas solicitantes de información pública y no mencionados específicamente como lo es el recurso de *mandamus* tradicional. Segundo, dispone que: “Este capítulo deberá **interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa para la persona solicitante de información pública**. En caso de conflicto entre las disposiciones de este capítulo y la de cualquier otra legislación, prevalecerá aquella que resulte más favorable para la persona solicitante de información y documentación pública”. 3 LPRA § 9922 (énfasis suplido).

- 4.37. En el presente caso, la solicitud de información cursada a las partes recurridas cumplió con los requisitos de forma y contenido establecidos en el Artículo 6 de la Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9916.
- 4.38. De igual forma, las solicitudes fueron remitidas a las y los oficiales de prensa de las partes recurridas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9915 (disponiendo que la designación de oficiales de información en las entidades gubernamentales “**no limitará de forma alguna la opción de los ciudadanos y de la prensa para solicitar información a otros funcionarios de la dependencia, incluyendo al Oficial de Prensa de la entidad gubernamental**”). (énfasis suplido). Véase también Centro de Periodismo Investigativo v. ASES, SJ2022CV06190 (Resolución del 22 de agosto de 2022).
- 4.39. Al momento de presentar este recurso ya ha transcurrido el término dispuesto en el Artículo 7 de la Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9917, para que las partes recurridas provean la información solicitada, sin que lo hubieran hecho.
- 4.40. Las partes contra las cuales se dirige el presente recurso tienen el deber de entregar la información solicitada.
- 4.41. La información solicitada es originada, conservada y/o recibida por las partes recurridas. Por lo tanto, es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia, si así lo solicita.
- 4.42. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico.
- 4.43. La información solicitada no está protegida de forma alguna por algún privilegio o reclamo de confidencialidad y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información, igualmente, las partes recurridas no han levantado ningún privilegio o reclamo de confidencialidad.
- 4.44. De hecho, en Irizarry Pabón v. Municipio Autónomo de Ponce, KLAN 2016-00602 (Sentencia del 30 de agosto de 2016), el Tribunal de Apelaciones resolvió una controversia similar a la de autos, ordenando la entrega de los nombres, salarios, puestos y funciones de todos los empleados del Municipio de Ponce para

cuatro (4) años fiscales, e interpretando una disposición de la Ley de Municipios Autónomos que clasificaba como confidenciales todos los documentos del expediente de personal de dichos empleados de manera limitada, para evitar que la medida violara el derecho constitucional de acceso a la información.

4.45. Así lo hizo también este Tribunal en Prados Rodríguez v. Rivera Schatz, et als., SJ2020CV05245 (Sentencia del 19 de octubre de 2020), en la que se ordenó la publicación del nombre, puesto, fecha de comienzo, terminación y salario de los empleados del Senado de Puerto Rico.

4.46. Aún si las partes recurridas pudiesen invocar algún reclamo de confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, el interés público en acceder a la misma supera el interés gubernamental en limitarlo.

4.47. Las actuaciones y omisiones de las partes recurridas al no proveer la información pública solicitada laceran los derechos constitucionales de acceso a la información y de libertad de prensa que asisten a la parte recurrente.

4.48. Por todo lo cual, procede declarar *con lugar* el presente recurso a tenor con la normativa prevaleciente, así como ordenar a las partes recurridas a proveer la información que le ha sido solicitada.

V. SÚPLICA

EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, se solicita a este Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, declare **HA LUGAR** el presente recurso y, en consecuencia, ordene a las partes recurridas a proveer una lista de los empleados de confianza de dicha entidad, incluyendo sus nombres, la posición que ocupan y sus salarios, desde el 2021 hasta el presente.

Además, se solicita al Tribunal que ordene a las partes recurridas a proceder con la divulgación prospectiva de esta información cuando le sea solicitada, en los mismos términos en los que le sea ordenado divulgar, y en cumplimiento con el Artículo 4 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9914, y con la normativa constitucional sobre acceso a la información en nuestra jurisdicción.

Por último, se solicita de este Tribunal la imposición del pago de las costas y los gastos de litigio, así como cualquier otro remedio que proceda en derecho.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 7 de junio de 2024.

(f) Luis José Torres Asencio

Colegiado Núm. 17087
TS Núm. 15610
Clínica de Asistencia Legal
Facultad de Derecho UIPR
PO Box 368038
San Juan, PR 00936-8038
Tel. (787) 209-6375; Fax: N/A
C/E: ltorres@juris.inter.edu

(f) Steven P. Lausell Recurt

Colegiado Núm. 17958
TS Núm. 16644
Clínica de Asistencia Legal
Facultad de Derecho UIPR
PO Box 194735
San Juan, PR 00919-4735
T. 787-751-1600; F. 787-751-1867
C/E: slausell@gmail.com

(f) Jeffrey J. Martínez Aguiar

Colegiado Núm. 21221
TS Núm. 23018
Clínica de Asistencia Legal
Facultad de Derecho UIPR
San Juan, PR 00919-4735
Tel. (787) 751-1600; Fax: 787-751-1867
C/E: jeffrey.martinez@lex.inter.edu

Se presenta libre de derechos en virtud del Artículo 9 de la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141-2019, 3 LPRA § 9919, y por la parte recurrente estar representada por el Proyecto de Acceso a la Información de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 4 LPRA § 303a.